



H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

"2021, AÑO DEL TRICENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA MISIÓN DE SANTIAGO DE LOS CORAS".
"2021, CINCUENTENARIO DE LA REINSTALACIÓN DEL MUNICIPIO EN BAJA CALIFORNIA SUR".
"2021, AÑO DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR".
"2021, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ARMADA DE MÉXICO".

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

**DIP. CHRISTIAN AGUNDEZ GOMEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
DE LA XVI LEGISLATURA DE BAJA CALIFORNIA SUR.
P R E S E N T E.-**

Quien suscribe Diputada Blanca Belia Márquez Espinoza, integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, en uso de las facultades que me confieren la fracción II del artículo 57 , así como la fracción II del 64, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, en concordancia con lo dispuesto en la Ley que rige el funcionamiento del Poder Legislativo, presento ante al pleno de la honorable XVI Legislatura la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y PROTECCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como diputadas y diputados es menester coadyuvar en la búsqueda de alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, entre otras cosas eliminando cualquier forma de discriminación.



El Estado Mexicano, cuenta con un marco jurídico moderno en materia de reconocimiento y protección de los derechos humanos de las mujeres y una política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres que incluye a los tres poderes del Estado y los tres órdenes de gobierno.

Sin embargo, existe todavía al día de hoy algunas leyes estatales que son necesario armonizar con la legislación nacional y los acuerdos internacionales de los que México es parte. En tal sentido se encuentra el caso de Baja California Sur, en donde es importante fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en los instrumentos normativos, de planeación y programáticos en el ámbito local para implementar dicha política.

En cuanto al marco jurídico legal, se requiere armonizar el Código Civil de Baja California Sur, que no obstante que entró en vigor el día 15 de junio de 1997, a lo largo de los años ha sido reformado en innumerables ocasiones a fin de perfeccionarlo y adecuarlo a las realidades del momento. No obstante lo anterior, dicho ordenamiento contiene aun figuras obsoletas y discriminatorias que son contrarias a los avances logrados en materia de igualdad de género y las acciones afirmativas necesarias para ello.

La presente iniciativa es producto de un profundo análisis derivado de foros y mesas de trabajo con actores estratégicos, en coordinación con el ISMUJERES, se tomaron diversos estudios en materia de perspectiva e igualdad de género como punto de partida, entre los que destaco el análisis de la Plataforma “MÉXICO RUMBO A LA IGUALDAD”, esta plataforma, es una herramienta del Instituto Nacional de las Mujeres que permite conocer los avances y áreas de oportunidad de las 32 entidades federativas en materia de transversalización del enfoque de género



en sus principales instrumentos normativos, de política pública, presupuestarios y de rendición de cuentas.

Según la valoración que dicha herramienta especializada, se determinó que Baja California Sur en su legislación Civil vigente incumple los siguientes tópicos:

- No existen sanciones civiles en los casos de violencia familiar
- No existe expresamente la reparación del daño en los casos de violencia familiar
- No está eliminado el supuesto de cesar la obligación de proporcionar alimentos por carecer de medios para cumplirla
- No está eliminada la figura del rapto
- No está eliminada la figura del adulterio
- No están eliminadas las expresiones discriminatorias respecto a los calificativos de las y los hijos.

Por lo anterior y a fin de lograr la reforma vanguardista que ponga a Baja California Sur en la calidad de Cumplimiento con los parámetros y recomendaciones establecidos por este indicador del Instituto Nacional de las Mujeres, en consonancia con lo señalado por la Organización de las Naciones Unidas derivadas de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), es que propongo las siguientes propuestas de reformas y adiciones al Código Civil vigente:

1.- Este Código data del año 1997, a lo largo de los años ha recibido innumerables reformas, sin embargo, ninguna de ellas ha reconocido la violencia familiar, salvo como una causal de divorcio, que, dada la dificultad de comprobarla, cuando se comete a través de violencia sexual entre cónyuges o bien cuando esta es psicológica, es difícil de acreditar. Por su parte el Código Penal de Baja California



Sur, establece el tipo penal de la violencia familiar en su artículo 200 y le atribuye una pena privativa de la libertad, en específico prisión de 1 a 5 años.

En nuestra legislación, no existen sanciones civiles derivado de la violencia familiar, por lo que la reforma busca, en principio, definir en un capítulo específico la violencia familiar, además incluir medidas cautelares como herramientas del juez familiar para garantizar la protección de la víctima, y, por último crear sanciones civiles, tales como una multa en caso de reincidentes y personas que no cumplan con las medidas cautelares, que hoy irían de 1,792.40 a 17,924.00 pesos.

2.- Respecto a la reparación del daño en los casos de violencia familiar, el Código Civil es omiso en este supuesto, podemos referir que el Código Penal de Baja California Sur en su artículo 200 establece el tipo penal de la violencia familiar, considerando medidas de protección para la víctima del delito.

Como parte de la iniciativa y a fin de contar con mayores instrumentos que permitan demandar la violencia al núcleo de la familia y contrarrestar sus efectos, es que proponemos se establezca de manera clara en la legislación civil la obligación de que los sujetos activos de la violencia al interior de la familia deban reparar el daño y los perjuicios generados por la conducta violenta y que se puedan demandar por la vía civil.

A través de la iniciativa se crea el Capítulo IX “DE LA VIOLENCIA FAMILIAR”, que contempla la creación de dos artículos, el 239 BIS y el 239 TER, que describen de manera clara el concepto de violencia familiar, así como detallan las nuevas facultades sobre medidas cautelares que puede disponer el juez de lo familiar en caso de presentarse situaciones de violencia.

3.- Los alimentos son irrenunciables y su obligación persiste, aun en momentos en



que el deudor alimenticio se encuentre en estado de imposibilidad, lo anterior encuentra sustento en diversos criterios jurídicos que establecen que la obligación no cesa, no se circunscribe a momentos determinados, incluso el acreedor alimentario puede demandar los alimentos después de muchos años y la obligación debe de ser cubierta considerando los gastos desde antes de nacer, y el gasto de parto y embarazo, por lo que jurídicamente la obligación subsiste.

Consideramos es un atentado en contra de los derechos de alimentos de los acreedores y va contra el interés superior de la niñez, el hecho de establecer una excepción y cese de obligación en el actual artículo 470, que señala que: "Cesa la obligación de dar alimentos, Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla", porque permite la posibilidad del fraude de acreedores, al simularse una imposibilidad material de otorgar alimentos.

Si bien un principio de derecho establece que nadie está obligado a lo imposible, se puede presentar el caso y este deberá ser acreditado y valorado por el juez de la causa, sin embargo, reiteramos esta no debe ser una situación que cese esa obligación de manera tajante y permanente, más bien la imposibilidad puede ser una medida temporal de incumplimiento, sin embargo no debe dejar de ser exigible en un futuro cuando las condiciones económicas del deudor cambien, por ello, proponemos la eliminación de la excusa de pago de alimentos por carecer de medios, priorizando el derecho futuro del acreedor alimentario.

4.- Existen diversas recomendaciones de ONU Mujeres, de la Convención (CEDAW, por sus siglas en ingles), de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y del Instituto Nacional de las Mujeres, en el sentido de eliminar de los Códigos Penales los delitos de estupro y rapto, y que, dependiendo



de las circunstancias particulares, esas conductas puedan ser considerados dentro del delito de violación.

Para los organismos internacionales, la figura del rapto, es considerada discriminatoria contra las mujeres, además de que en materia penal se convierte en una salida legal para quienes cometen el delito de violación contra menores de edad. La tendencia nacional e internacional es reformar las legislaciones a fin de establecer que quien rapte incurra en el delito de privación ilegal de la libertad, que el bien jurídico tutelado sea la libertad y no la honra. En atención a la modernización legislativa, se considera que el rapto está sustentado en estereotipos culturales sobre las mujeres, relacionados con la honra y la fidelidad conyugal, sin embargo, con este cambio en la jurisdicción veremos mayor protección a las mujeres.

Por lo anterior, proponemos modificar el artículo 163 del Código Civil a fin de eliminar el rapto, dentro de las causales de impedimento para celebrar el matrimonio.

5.- Reiteramos que en la legislación civil de la entidad existen figuras jurídicas rebasadas que atentan contra el honor de las mujeres y hombres, como es el caso de la figura del adulterio, toda vez que se establece que el adulterio judicialmente comprobado, habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio, es una causal de impedimento para contraerlo. Por su parte, el artículo 230 del citado Código dispone que las donaciones antenupciales son revocables y se entienden revocadas por el adulterio.

Como reflexión de las mesas de trabajo se concluyó que el adulterio no debe existir en la normatividad, anteriormente el adulterio tenía consecuencias jurídicas en dos sentidos, una como causal de divorcio y también estaba tipificado como delito, con el avance de la legislación hacia la ampliación de derechos y libertades de las



personas estas dos consecuencias desaparecieron, ajustándose la norma al respeto de las relaciones personales, dejándolas en un ámbito privado.

El adulterio busca proteger conceptos como “el buen nombre, el prestigio y el honor del cónyuge inocente”, que no son “bienes jurídicos” que corresponda proteger al derecho penal o civil, sino a la moral individual. Se trataba de conceptos generales relacionados con la moral y el deber de recíproco respeto a la dignidad entre dos personas que celebran un contrato de matrimonio.

Con base en ese principio, se propone derogar el adulterio como causal de impedimento para celebrar el matrimonio.

6.- Dentro de las observaciones referidas rumbo a la igualdad, existe un apartado que resulta imperante atender, referente a la discriminación latente contenida en la redacción del Código Civil vigente, que atenta contra los derechos de las niñas y niños, al contemplar calificativos discriminatorios, tales como HIJO ADOPTIVO, HIJO PROPIO, HIJO INCESTUOSO, HIJO ADULTERINO e HIJO EXTRAMATRIMONIAL, al final, debemos de entender que todos son hijos, independientemente de las condiciones de los progenitores, por lo que es irrelevante establecer adjetivos calificativos que resultan por demás ofensivos.

Con ello, se busca que el niño o la niña puedan ser reconocidos por su padre biológico, independientemente del estado civil de la madre. Llamarle a un niño o niña adulterino, o negarle el nombre de sus padres biológicos porque una norma lo prohíbe es una forma de infringir sus derechos humanos, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales”, Con ello se permitirá armonizar el Código Civil con lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a respetar el



derecho a la identidad, incluidos el del nombre y de las relaciones familiares.

Es inadmisibles que en pleno Siglo XXI, cuando nuestro país ha suscrito una serie de acuerdos y tratados internacionales respecto a los derechos de las y los niños y cuando ya se han incorporado a nuestras leyes una serie de preceptos que incorporan los derechos de estos, incluyendo nuestra Carta Magna, aún se cuente con este tipo de clasificaciones discriminatorias de los hijos en las leyes de Baja California Sur.

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, al tenor de lo siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:

SE REFORMAN LOS ARTICULOS 72, 416, 546 y la fracción VIII DEL ARTICULO 163; SE ADICIONA UN PARRAFO TERCERO AL ARTICULO 45, ASI COMO EL CAPITULO NOVENO AL TITULO VI; SE CREAN LOS ARTICULOS 329 BIS, 329TER, del mismo modo SE DEROGAN EL ARTICULO 246, así como LAS FRACCIONES I DEL 470 y VI, RESPECTIVAMENTE, TODOS DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR. Para quedar como sigue:

Artículo 72.- La madre tiene la obligación de reconocer a su hijo. Si al registrarse el nacimiento de un hijo ésta no comparece, se dará vista al



Ministerio Público para que inicie oficiosamente la investigación de la maternidad ante los tribunales.

Artículo 74.- Se deroga.

Artículo 76.- se deroga.

***Artículo 163.- Son impedimentos para celebrar el matrimonio:
I al VII...***

VIII.- La fuerza o el miedo graves.

Artículo 230.- Las donaciones antenupciales son revocables y se entienden revocadas por el abandono injustificado del domicilio conyugal por parte del donatario, cuando el donante fuese el otro cónyuge.

Artículo 246.- se deroga.

CAPÍTULO IX DE LA VIOLENCIA FAMILIAR.

Art. 329 BIS. - Por violencia familiar se considera todo acto de poder u omisión intencional, único, recurrente o cíclico, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, patrimonial o sexualmente, si tiene por efecto causar daño a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, por parte de quienes tengan parentesco o lo hayan tenido o mantengan una relación de hecho.



Art. 329 TER. - Los integrantes de la familia que incurran en violencia familiar, deberán reparar los daños y perjuicios que se ocasionen con dicha conducta, con autonomía de otro tipo de sanciones que este y otros ordenamientos legales establezcan.

En todas las controversias derivadas de violencia familiar, el juez dictara las siguientes medidas cautelares:

- I.- Ordenar la exclusión del agresor del domicilio del grupo familiar;***
- II.- Prohibir al agresor el acceso al domicilio del grupo familiar, así como a los lugares de trabajo o de estudio de la víctima.***
- III.- Prohibir al agresor que se aproxime a las víctimas.***
- IV.- Ordenar la exclusión del agresor y el reingreso de la víctima al domicilio del grupo familiar, cuando esta por razones de seguridad personal ha debido salir del mismo;***
- V.-Decretar y asegurar provisionalmente alimentos.***
- VI.- Apercibir al agresor para que se abstenga de dilapidar los bienes de la familia.***

En caso de reincidencia o desobediencia a estas medidas, el juez decretara multa de 20 hasta 200 Unidades de Medida y Actualización.



Artículo 416.- El interesado debe solicitar la adopción en forma personal y directa, acreditando, además:

I.- Que tiene medios bastantes para proveer a la subsistencia y educación del menor o del incapacitado, según las circunstancias y necesidades de la persona que se trata de adoptar;

... II-IV

...

Artículo 470.- Cesa la obligación de dar alimentos:

I.- se deroga

II a la V ...

Artículo 482.- La patria potestad la ejercerán únicamente las personas que lo adopten, aplicándose lo dispuesto en los dos artículos anteriores, por lo que toca a la patria potestad de los abuelos.

Artículo 546. - El adoptante que ejerza la patria potestad tiene derecho de nombrar tutor testamentario a su hijo, aplicándose a esta tutela lo dispuesto en los artículos anteriores.



TRANSITORIOS

PRIMERO: Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

Dado en la Sala de Sesiones “José María Morelos y Pavón” del Poder Legislativo a los 21 días del mes de septiembre de 2021.

A T E N T A M E N T E

ATENTAMENTE

DIP. BLANCA BELIA MARQUEZ ESPINOZA
Integrante de la Fracción Parlamentaria del
Partido Acción Nacional